RAD: 13001-31-10-004-2022-00513-00

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
RAMA JUDICIAL**

**JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO
RAD: 13001-31-10-004-2022-00513-00**

Cartagena de Indias, primero (1) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Procede el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito Cartagena a pronunciarse respecto de la acción de tutela promovida por **DELMIRO QUINTANA CARABALLO** contra **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES**; de manera oficiosa fueron vinculados a esta acción de tutela, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, MINISTERIO DEL TRABAJO, al AGENTE LIQUIDADOR DE EMPOISLAS LTDA. EN LIQUIDACIÓN, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA- UAECSP-, A TIEMPO SERVICIOS y la COOPERATIVA AUTÓNOMA.

ANTECEDENTES

1. **DELMIRO QUINTANA CARABALLO**, formula acción de tutela con el propósito de que se le amparen su derecho fundamental de petición, presuntamente conculcado por la entidad accionada.

Como sustento de la acción, presentan los hechos que a continuación se resumen:

- Afirma que en el día 8 de julio de 2022, presentó derecho de petición a la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, en el cual

RAD: 13001-31-10-004-2022-00513-00

solicitó copia de la relación de cotizaciones realizada por la extinta **EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA LIMITADA (EMPOISLAS LTDA)**

- Manifiesta que el día 29 de julio del presente año, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, le dio respuesta informándole, que le habían dado traslado a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), vista que son ellos los competentes para dar respuesta.

- Seguidamente indica que, a la fecha de la interposición de la acción de tutela, la accionada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, no ha dado respuesta a la respectiva petición.

2. Una vez notificada la tutela se obtuvieron los siguientes informes:

2.1. MINISTERIO DEL TRABAJO: afirmaron que se debe declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva teniendo en cuenta que no existen obligaciones ni derechos recíprocos entre el accionante y esta entidad, lo que da lugar a que haya ausencia por parte de este Ministerio, bien sea por acción u omisión, de vulneración o amenaza alguna de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

2.2. COOPERATIVA AUTONOMA DE SEGURIDAD C. T. A.: arguyen no constarles los hechos manifestados en la acción de tutela, indicando además el periodo en el cual, estuvo vinculado laboralmente con ellos.

2.3. DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA: arguyen que el 20 de octubre

RAD: 13001-31-10-004-2022-00513-00

de 2022, desde la vía correo electrónico, le fue enviado certificación de tiempos laborados CETIL, donde consta que el señor Delmiro Quintana Caraballo, laboro en la Empresa de Obras Sanitarias de San Andrés y Providencia LTDA – Empoislas en el periodo que comprende desde el 06-10-1987 hasta el 15-12-1993.

2.4 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES: señalan que el hecho generador de la presunta vulneración no se ha configurado en la medida en que el derecho prestacional no ha sido reclamado ante la entidad y que no han tenido la oportunidad de pronunciarse dentro de los términos de la ley y la jurisprudencia.

No obstante, afirman que muy a pesar que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES informa haberle dado traslado a la petición a través del correo contacto@colpensiones.gov.co, afirman que canal de comunicación es de uso exclusivo para que los ciudadanos, usuarios y otros grupos de interés, radiquen facturas y comunicaciones oficiales externas de los servicios de Colpensiones. Por lo que dicho buzón electrónico no se encuentra disponible para la radicación de requerimientos diferentes a los aquí descritos.

CONSIDERACIONES

1. La Constitución Política de Colombia no solo consagró en forma expresa un determinado número de derechos considerados como fundamentales ya antes reconocidos por organizaciones supranacionales, sino que además instituyó un mecanismo especial para brindarle protección jurídica a tales derechos cuando resulten violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos determinados en la ley.

RAD: 13001-31-10-004-2022-00513-00

Dispone el artículo 86 de la Constitución Política:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La acción de tutela, aunque esté prevista para la protección de los derechos Constitucionales Fundamentales, expresamente señalados en nuestra Carta Magna, no es un mecanismo excluyente de la protección consecencial e indirecta de los restantes derechos e intereses jurídicos, siempre que en su ejercicio se reclame y se determine la violación o la amenaza de violación directa y eficiente de los derechos Constitucionales Fundamentales que resulten afectados por conexidad con otros derechos primarios como la vida, la integridad personal, o la dignidad humana.

Para el caso bajo estudio, el derecho de **petición**, es el invocado para su protección, el cual permite a toda persona elevar peticiones respetuosas a las autoridades y que esta sea resuelta en forma rápida y completa, como lo determina el artículo 23 de la Constitución Nacional. En tal sentido es esta la vía (acción constitucional) idónea para lograr su protección cuando resulte amenazado o vulnerado por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública y en ciertos eventos por los particulares, es la acción de tutela ante la ausencia de otro medio de defensa judicial eficaz para hacer efectiva su garantía.

RAD: 13001-31-10-004-2022-00513-00

El despacho encuentra probado que efectivamente el accionante presentó derecho de petición a la Superintendencia de Sociedades y que esta última, remitió por competencia la petición a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

Siendo, así las cosas, se determinará si efectivamente bajo estas circunstancias se presentó una violación al derecho fundamental de petición al señor DELMIRO QUINTANA CARABALLO, por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones

2. Sea oportuno indicar, que la solicitud de amparo del actor, tiene por finalidad la protección efectiva del derecho fundamental de petición el cual considera vulnerado.

Para el caso puesto en conocimiento del despacho, resulta imperioso traer a colación lo anotado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su Artículo 14, sobre los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones indica que “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción (...)”.

Según la Corte Constitucional, el contenido esencial de este derecho de petición comprende: *“a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y*

RAD: 13001-31-10-004-2022-00513-00

d) *la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo.*"¹.

Más adelante, la misma ley 1755 de 2015 en relación con los funcionarios sin competencia para resolver las peticiones formuladas en ejercicio del derecho de petición, dispuso lo siguiente:

"Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente."

Para el caso bajo estudio, podemos determinar del informe rendido por la misma la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, que para la fecha de la interposición de la acción de tutela y/o para la fecha que rindió el informe solicitado en auto de fecha 19 de octubre de 2022, no cumplió con la carga de brindar una respuesta de fondo, clara y congruente con lo pretendido en la petición que le fue enviado por parte de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, de conformidad con el artículo 21 de la ley 1755 de 2015.

De ahí que, no es de recibo lo afirmado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, que el canal de comunicación, al cual fue remitido la petición por parte de la Superintendencia de Sociedades es de uso exclusivo para la radicación de facturas y comunicaciones oficiales

¹ Corte constitucional en Sentencia T-251 de 2008.

RAD: 13001-31-10-004-2022-00513-00

externas de los servicios de Colpensiones, y no para derecho de petición, ya que dicho canal permite la comunicación entre la entidad y el ciudadano. Por ello, le asiste el deber de redireccionar el requerimiento allegado al área competente para brindar una respuesta.

Y es que, ha sido enfática la Corte en casos como estos, en que los medios tecnológicos no deben ser barreras para obstaculizar el buen suceso del derecho de petición, por lo que hasta las redes sociales pueden ser utilizadas como canal para tal fin; en sentencia T-230 de 2020, dijo:

“En suma, las solicitudes que se presenten ante las autoridades podrán realizarse por vía verbal, escrita o cualquier otro medio idóneo que sirva para la comunicación, para lo cual, por regla general, el particular tendrá la posibilidad de escoger entre canales físicos o electrónicos que hayan sido habilitados por la entidad. Cada autoridad tiene la posibilidad de determinar cuáles son los espacios tanto físicos como electrónicos de que dispondrá para mantener comunicación con la ciudadanía, teniendo en cuenta sus funciones, presupuesto y posibilidad de atención efectiva. **En todo caso, siguiendo lo dispuesto en la ley y conforme a la jurisprudencia se aclara que cualquier tipo de medio tecnológico habilitado por la entidad y que funcione como un puente de comunicación entre las personas y las entidades, podrá ser utilizado para el ejercicio del derecho fundamental de petición. De ahí que, siempre deberá ser atendido por los funcionarios correspondientes para dar respuesta a las solicitudes, quejas, denuncias y reclamos que se canalicen por dicho medio.**” (lo subrayado es nuestro)

En los anteriores términos, se concederá el amparo de protección del derecho de petición solicitado por el señor DELMIRO QUINTANA CARABALLO, por lo que se ordenará a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, que en el término perentorio de 48 horas, resuelva de fondo la solicitud presentada por el demandante, verificando su respectiva notificación.

RAD: 13001-31-10-004-2022-00513-00

3. Vale la pena poner de presente que una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición pronunciándose de fondo sobre los requerimientos del solicitante. La misma no debe ser afirmativa o negativa, como quiera que no es viable al juez constitucional, indicar o hacer manifestación alguna sobre el sentido de las decisiones que tome la entidad accionada. Lo fundamental es dar respuesta a las peticiones en sentido estricto.

Sobre ello, la Corte Constitucional, en sentencias C-951 de 2014, dispuso:

“Ahora bien, en materia de respuesta de fondo a las solicitudes, la Corte ha advertido que la resolución de la solicitud no implica otorgar lo pedido por el interesado. Lo anterior, en razón de que existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a lo pedido, que consiste en que: “el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta. No se decide propiamente sobre él [materia de la petición], en cambio si se decide por ejemplo sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo invocado ante la administración para la adjudicación de un baldío, el registro de una marca, o el pago de una obligación a cargo de la administración”. Así, el derecho a lo pedido implica el reconocimiento de un derecho o un acto a favor del interesado, es decir el objeto y contenido de la solicitud, la pretensión sustantiva. Por ello, responder el derecho de petición no implica otorgar la materia de la solicitud”

DECISIÓN

En mérito de lo anteriormente expuesto, este juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Cartagena de indias, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER la acción de tutela presentado por el señor DELMIRO QUINTANA CARABALLO, contra

RAD: 13001-31-10-004-2022-00513-00

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES.

SEGUNDO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir del recibo de la comunicación de este fallo, proceda a dar respuesta de fondo, clara, oportuna y completa a la petición.

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes involucradas en este asunto en la forma más expedita y eficaz.

CUARTO: ENVIAR la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, con observancia del término previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUZ ESTELA PAYARES RIVERA
Juez

Firmado Por:
Luz Estela Payares Rivera
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 04 Oral
Cartagena - Bolivar

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4c3ec32655cae30b09553fafa5735089e1c8cb4a7b3068c038d13c71529459d**

Documento generado en 01/11/2022 10:09:20 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>